

Roj: STSJ ICAN 1481/2010
Id Cendoj: 35016330022010100091
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)
Sección: 2
Nº de Recurso: 49/2008
Nº de Resolución: 87/2010
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Ponente: CESAR JOSE GARCIA OTERO
Tipo de Resolución: Sentencia

Código 010.-

Ref: RCA nº 49/08 .

SENTENCIA

Ilmos/as Sres/as:

Presidenta: Dña Cristina Páez Martínez Virel.

Magistrado/as: Don César José García Otero.

Dña Inmaculada Rodríguez Falcón.

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a 9 de abril de 2.010.

Visto, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, el presente recurso contencioso-administrativo nº 49/08, seguido por el Procedimiento Ordinario; en el que son partes: como demandante: D. Ovidio , representado por la Procuradora Dña Carmen Delia Ramos Herrera y defendido por el Letrado D. José Ortega; y, como Administración demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por Abogado del Estado; versando sobre **recuperación** de oficio del dominio público marítimo-terrestre, siendo la cuantía indeterminada.

I.- ANTECEDENTES .-

PRIMERO.- Por resolución de la Dirección General de Costas se desestimó el recurso de alzada interpuesto por D. Ovidio contra la resolución de la Demarcación de Costas de Canarias, de 20 de marzo de 2.007, que declaró la **recuperación** de oficio de la posesión del dominio público marítimo-terrestre en una extensión de unos 80 m2, ocupado mediante una edificación ubicada en Punta de la Seba, en el término municipal de La **Oliva** (isla de **Fuerteventura**), situada entre los mojones M-97 y M-98 del deslinde aprobado por Orden Ministerial de 28 de agosto de 2.003, con concesión de un plazo de un mes para proceder al desalojo y retirada de las obras realizadas.

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo por la Procuradora Dña Carmen Delia Ramos Herrera, en nombre y representación de D. Ovidio , que fue admitido a trámite, y, en su momento, se formuló la correspondiente demanda en la que se pedía la estimación del recurso y la declaración de nulidad de la resolución recurrida.

TERCERO.- La Administración demandada se opuso al recurso y pidió su desestimación, tras lo cual se abrió el período probatorio, a cuya finalización se dio traslado para conclusiones, que evacuaron ambas partes con ratificación en sus respectivas pretensiones.

Fue ponente el Ilmo Sr Magistrado don César José García Otero, que expresa el parecer unánime de la Sala.-

II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS .

PRIMERO.- El objeto del recurso contencioso-administrativo es la pretensión de que se anule la resolución de la Dirección General de Costas que desestimó el recurso de alzada interpuesto por D. Ovidio contra la resolución de la Demarcación de Costas de Canarias, de 20 de marzo de 2.007, que declaró la **recuperación** de oficio de la posesión del dominio público marítimo-terrestre en una extensión de unos 80 m2, ocupado mediante una edificación ubicada en Punta de la Seba, en el término municipal de La **Oliva** (isla de **Fuerteventura**), situada entre los mojones M-97 y M-98 del deslinde aprobado por Orden Ministerial de 28 de agosto de 2.003, con concesión de un plazo de un mes para proceder al desalojo y retirada de las obras realizadas.

Al respecto, los motivos de impugnación de dicha resolución son, en lo sustancial, los siguientes:

1º) Se produce una extralimitación en cuanto el expediente de **recuperación posesoria**, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Costas, tiene como única finalidad la **recuperación** de la posesión de los bienes pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre, siendo el derribo una consecuencia posterior que exige acudir al procedimiento de desahucio administrativo del artículo 108 de la Ley y 17 del Reglamento.

La tesis del actor es que la **recuperación posesoria**, tal y como está regulada en la ley, no se dirige contra las instalaciones sino contra la indebida ocupación del demanio, de forma que, una vez recuperadas, y desahuciado el ocupante, quedarán expedito y a disposición de la Administración, pero, en el caso, lo que hace la Administración es unificar indebidamente **recuperación posesoria** y desahucio para poder cargar al interesado con los gastos del derribo, lo que califica como manipulación que no puede prosperar por ser contrario a la ley que no contiene norma alguna que permita que la **recuperación posesoria** puede llevar aparejada una demolición de la construcción.

A ello añade que lo previsto en la Disposición Transitoria 12ª, apdo 1º del Reglamento de Costas, relativa a que las instalaciones construidas antes de la vigencia de la nueva ley sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación entonces vigente, que serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público, consagra una potestad de la Administración que no puede ejercitarse en el marco sumario del procedimiento de **recuperación** de oficio, que nació para fines distintos.

Y sostiene también que tampoco es aplicable la Disposición Transitoria 3ª, apartado 3º, del Reglamento de Costas, sobre edificaciones ilegales a la entrada en vigor de la ley pues la **choza** no era ilegal dado que no existía deslinde alguno, sin que se hubiese dirigido requerimiento o incoado procedimiento sancionador con anterioridad al deslinde de 2.003.

2º) El deslinde, que determinó la **recuperación posesoria** de oficio, fue aprobado por Orden Ministerial que no fue notificada al actor pese a su condición de interesado, pese a que no era excesivamente compleja su localización a través de una simple consulta al Ayuntamiento.

3º) El actor tenía derecho a una concesión administrativa conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas,

La tesis es que la Administración ha impedido que pueda ejercitar el derecho a solicitar una concesión administrativa con un doble mecanismo: al no serle notificado el deslinde y, por ello, no ser informado del derecho a solicitar una concesión, y al aprobar la **recuperación posesoria** y transformarla en acto de derribo, mas cuando existe la posibilidad de que la construcción se situase en una zona que no era dominio publico con arreglo a la Ley de Costas de 1.969. en cuyo caso era obligado el otorgamiento de oficio de la concesión.

4º) Era procedente la legalización por razones de interés público, al tratarse de una **choza** incluida en la Carta Arqueológica de **Fuerteventura** elaborada por el Cabildo Insular y estar en trámite su inclusión en el Catálogo municipal, cuyo uso no es residencial pues no reúne condiciones para ser habitada de forma permanente y por cuanto era procedente que, en la correcta interpretación de la Disposición Transitoria Duodécima del Reglamento de Costas, la Administración pusiese en marcha el procedimiento de legalización en lugar de acordar la demolición.

5º) Se vulnera el artículo 8 de la LRJPAC pues existe un Convenio para la gestión conjunta del litoral canario entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias, de 4 de febrero de 2.006, con creación de una comisión mixta que debía estudiar cada iniciativa de actuación, entre las que se incluyen los rescates y derribos.

6º) Se alude también a la vinculación de la Ministra de Medio Ambiente por un compromiso formal con un Senador canario para la reunión de la comisión mixta prevista en el Convenio antes de proceder a los derribos, a la tramitación de una iniciativa en el Parlamento de Canarias para proteger de los derribos en

aplicación de la ley de costas a determinados núcleos costeros y a la posición del Cabildo de **Fuerteventura** contrario a los derribos expresa por medio de una moción.

A la pretensión de nulidad se opone la Administración demandada con diversos argumentos en defensa de la plena legalidad de la **recuperación** de oficio y de la orden de demolición que constituye su consecuencia.

SEGUNDO.- Pues bien, a propósito del primer motivo de impugnación simplemente decir que la consecuencia de la declaración de procedencia de la **recuperación** de oficio del dominio público marítimo-terrestre no es otra que la efectiva **recuperación** con todas las consecuencias, entre ellas, la obligación de quien ocupa indebidamente el demanio de retirar las construcciones e instalaciones. Lo contrario sería convertir la **recuperación** en una mera declaración formal sin efectos ejecutivos.

Al respecto, es plenamente compatible el carácter declarativo de la resolución que pone fin al procedimiento de **recuperación posesoria** de oficio, que puede ejercitar la Administración en cualquier tiempo, con la consecuencia de dicha **recuperación**, que no es otra que la potestad de la Administración de proceder a la retirada de las instalaciones que invaden el demanio, esto es, que ocupan el espacio cuya posesión se recupera, sin perjuicio de que dicha retirada o derribo se lleve a cabo de forma voluntaria o por vía de ejecución forzosa, siendo lo decisivo que la ejecución no exige acudir a procedimiento alguno de desahucio sino, tan solo, acudir a las reglas de ejecución de actos firmes y ejecutivos y, por ello, en defecto de cumplimiento voluntario, a las normas que regulan la ejecución forzosa de los actos administrativos.

TERCERO.- En relación con el anterior motivo, y en cuanto a las consecuencias del deslinde, cabe decir que una vez firme, la resolución de deslinde, en los términos del art. 13 de la Ley, será título bastante para justificar la titularidad dominical a favor del Estado, que es lo que ocurre en el caso examinado en el que la Administración estatal ejercitó la potestad recuperatoria de oficio con la cobertura del deslinde aprobado por Orden Ministerial de 28 de agosto de 2.003.

En este sentido, una vez practicado el deslinde, la delimitación del dominio público despliega todos sus efectos tanto en lo que se refiere a la titularidad demanial de los terrenos que excluye cualquier otra propiedad sobre los mismos (artículo 9.1 de la Ley 22/1988, de Costas) , como en lo relativo al régimen legal que les es de aplicación en tanto que bienes demaniales, y, en particular, en cuanto a la sujeción de los bienes deslindados a las normas que regulan la utilización del dominio público marítimo-terrestre (Título III de la Ley de Costas).

Por lo demás, no es este el proceso para impugnar posibles irregularidades o motivos de nulidad de un deslinde firme y ejecutivo.

El Tribunal Supremo ha negado la posibilidad de que el deslinde pueda ser objeto de una impugnación indirecta porque no alcanza el rango de una disposición general. Así en la sentencia de fecha 27 de abril de 2005 advierte que "...según declara con toda corrección la Sala sentenciadora, la Orden ministerial aprobatoria de un deslinde marítimo terrestre carece del significado de las disposiciones de carácter general y, por consiguiente, no cabe su impugnación de forma indirecta, como sucede con éstas cuando son objeto de actos de aplicación."

Y, en cuanto a los efectos del deslinde, el mismo Tribunal, en sentencia de 28 de julio de 2009, ha destacado la diferencia entre la actual y anterior ley de Costas " (...) en la vigente ley de Costas de 1988 se ha producido, en relación con la de 1969, una inversión de las posiciones procesales, en la que el titular de la finca afectada por un deslinde de costas se encuentra con la carga de actuar en defensa de su propiedad, mientras que el Estado pasa a la más cómoda posición de demandado. A diferencia de lo que ocurría con la Ley de Costas de 1969, bajo cuyo imperio era el Estado el demandante en la acción reivindicatoria de la finca de propiedad particular afectada por el deslinde. Sin embargo, esta inversión de las posiciones procesales, no significa que el particular no pueda defender su propiedad y así lo posibilitan los arts. 13.2, in fine, y 14 Ley de Costas y la sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991 (en fundamento 8 .B.c y d). "

En definitiva, el deslinde tiene efectos declarativos y, en el caso, sirve de cobertura al ejercicio de la potestad de **recuperación posesoria** del bien que se encuentra en zona de dominio público marítimo terrestre, siendo consustancial a la **recuperación** la obligación de la Administración de proceder al levantamiento de la ocupación y retirada de las instalaciones.

Es mas, es plenamente aplicable la doctrina contenida en la STS de 1 de junio de 2.009, en la que se señala que "(...) ni siquiera cabe afirmar que aquellas irregularidades procedimentales en la tramitación del deslinde haya existido, pues no habiendo aportado la recurrente -ni consta que lo hiciesen sus causantes- un título propiedad o de titularidad de un derecho real o arrendaticio sobre el terreno, no es exigible que la Administración les notificase la incoación del procedimiento ni, por tanto, la resolución que puso fin al

expediente de deslinde, ya que tampoco comparecieron en el procedimiento para justificar su condición de interesados en cualquier otro concepto (artículos 12.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y 22.1 y 26.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre)" art.22.1 EDL 1989/14894 art.26.2 EDL 1989/14894

Estamos, cuando se trata de deslinde, ante un acto administrativo, normalmente plúrimo, afectante al particular o a los particulares titulares de bienes o derechos patrimoniales incluidos en el ámbito físico del deslinde, cuya resolución delimita tales derechos en relación con el demanio público, sin que resulte de aplicación el art. 26 LJCA, reservado a las disposiciones generales, lo cual no significa que el particular quede impedido de reaccionar frente al delinde pues podrá acudir a la vía de revisión de oficio de actos administrativos, o podrá reivindicar ante la jurisdicción civil la titularidad del bien, como ha advertido el Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de diciembre de 2.008, "(..) en la vigente ley de Costas de 1988 se ha producido, en relación con la de 1969, una inversión de las posiciones procesales, en la que el titular de la finca afectada por un deslinde de costas se encuentra con la carga de actuar en defensa de su propiedad, mientras que el Estado pasa a la más cómoda posición de demandado. A diferencia de lo que ocurría con la Ley de Costas, bajo cuyo imperio era el Estado el demandante en la acción reivindicatoria de la finca de propiedad particular afectada por el deslinde. Sin embargo, esta inversión de las posiciones procesales, no significa que el particular no pueda defender su propiedad y así lo posibilitan los arts. 13.2, in fine, y 14 Ley de Costas y la sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991 (en fundamento 8 .B.c y d)".

En cualquier caso, la **recuperación posesoria** del dominio público marítimo terrestre, -según se desprende del artículo 10 de la Ley -, puede efectuarse en cualquier tiempo, al tener estos bienes el carácter de imprescriptibles, y, una vez firme la resolución de deslinde, en los términos del art. 13 de la Ley, será título bastante para justificar la titularidad dominical a favor del Estado a través del ejercicio de la potestad recuperatoria del demanio.

CUARTO.- En cuanto a la aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, apdo 1º, nada tiene que ver con el caso, pues los destinatarios del derecho de ocupación y aprovechamiento, mediante la correspondiente concesión, son los " .. titulares de espacios de zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de la presente ley." .

La tesis del actor es que fue privado del derecho de solicitar la concesión pues no le fue notificado el deslinde en su momento, y se acordó la **recuperación posesoria** de oficio, pero, sin embargo, nada le ha impedido, ni le impide, acudir a los Tribunales Civiles a efectos de obtener la declaración de propiedad particular del espacio ocupado por la **choza** de la que se erige como propietario.

El apdo 3º de la misma Disposición deja claro que " En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la presente ley ,se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el art. 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras"

Es decir, es la ley la que establece el deslinde como instrumento para que el estado justifique una titularidad que constituye un hecho natural

QUINTO.- En cuanto a la Disposición Transitoria Duodécima del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se Aprueba el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas , literalmente dice:

1. Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas , sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente serán demolidas cuando no proceda de su legalización por razones de interés público. (disposición transitoria cuarta, 4, de la Ley de Costas)

2. El procedimiento para la legalización será el que corresponda según la clase de autorización o concesión de que se trate. La autorización competente para resolver en cada caso deberá apreciar, motivadamente, las razones que concurren para adoptar una u otra resolución. Para la legalización, que podrá ser total o parcial, las razones de interés público deberán ser apreciadas por acuerdo entre las tres Administraciones (estatal, autonómica y local), a cuyo efecto el órgano competente para dictar la resolución recabará el informe de las otras Administraciones, que se entenderá desfavorable a la legalización si no se emite en el plazo de un mes.

3. Cuando se trate de obras o instalaciones construidas sin licencia municipal en la franja comprendida entre los 20 y 100 metros de la zona de protección, el procedimiento de legalización se tramitará por la Corporación o autoridad correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación urbanística y se iniciará de oficio o a instancias del Servicio Periférico de Costas .

3.".

A la vista de dicha Disposición se reprocha a la Administración que no haya iniciado de oficio el procedimiento de legalización de dicha Disposición pese a que se puso de relieve en el expediente el valor etnográfico y cultura de la **choza** situada en el espacio a recuperar, incluida en la Carta Arqueológica de **Fuerteventura**.

Lo que aquí se examina , por tanto, ya no es la procedencia de la **recuperación posesoria** de oficio, sino la procedencia de no iniciar el procedimiento de legalización previsto en la precitada Disposición Transitoria, es decir, el reproche a la Administración es por no haber tenido cuenta la existencia de razones de interés público para iniciar dicho procedimiento y para excluir, de partida, la demolición.

A propósito de esas razones de interés público para la legalización aparece en el expediente un primer informe del Técnico de Patrimonio Histórico del Cabildo (folio 7) en el que se dice lo siguiente: "En Caleta de la Seba, según información de la Carta Arqueológica de **Fuerteventura**, obrante en este Departamento, se recoge la existencia de un conjunto de estructuras de piedra seca (registrado en el inventario con el nº 15), compuesto por 18 construcciones, 17 de ellas próximas a la costa y una al otro lado del camino que discurre entre Majanillo y El Cotillo, en las que se localiza abundante material malacológico, lítico y cerámico. En la prospección superficial realizada no se constató la existencia de material arqueológico aborigen y por ello, se le asignó al conjunto una adscripción cultural postconquista, con claros síntomas de reutilización por pescadores, campistas, etc, hasta la actualidad".

En otro informe (folio 15) el Ayuntamiento advertía que: "(...) por su tipología y características generales, asociadas a las casas tradicionales de pescadores y mareantes de la zona", así como "por su valor etnográfico", el Ayuntamiento estaba estudiando su inclusión en el Catálogo Arquitectónico del Patrimonio Municipal.

Un segundo informe del Técnico de Patrimonio Histórico del Cabildo reconocía que la **choza** había sido objeto de intervención con modificación de su tipología, si bien concluía que " Estos poblados ubicados en la costa, que son el resultado de la actividad pesquera y del marisqueo realizadas en el litoral de la Isla, debido a su importancia etnográfica deberían figurar registradas en los Catálogos Arquitectónicos Municipales.. ".

Ya en el proceso, se practicó informe pericial en el que se incluyen las siguientes conclusiones: "Dicha construcción que ha sido objeto de una intervención de conservación y restauración, sigue reuniendo todos y cada uno de los elementos que contribuyeron a que en su momento se introdujera en la Carta Arqueológica de **Fuerteventura** y cumple con todos los requisitos para que se recoja en el Catálogo Arquitectónico municipal, puesto que se están estudiando las alegaciones y las nuevas introducciones de las que forma parte.

Por lo tanto, el derribo, total o parcial, de dichas instalaciones o de sus alrededores, y/o chozas cercanas es un atentado contra nuestra herencia cultural y patrimonio histórico"

Así las cosas, la función de la Sala es examinar si, en el curso del expediente, se invocaron razones de interés público que debieron llevar a la Administración a iniciar el procedimiento de la Disposición Transitoria, a cuyo fin cabe decir que el propio concepto de interés público incorpora un concepto jurídico indeterminado que hace sumamente complejo el control judicial, que solo puede venir por los hechos determinantes de la decisión, por la motivación o por el procedimiento.

Y, en cuanto a los hechos determinantes constan acreditados datos, algunos tan objetivo como la inclusión de la construcción en la Carta Arqueológica elaborada por el Cabildo por su valor etnográfico, para que pueda entenderse razonable la iniciación del procedimiento de legalización.

En cuanto a la motivación, es contradictoria pues en la resolución de la Demarcación de Costas se rechaza el inicio del procedimiento de legalización por no quedar acreditada la localización de la **choza**, esto es, por no quedar acreditado que fuese una de las incluidas en la Carta Arqueológica, mientras que en la respuesta al recurso de alzada se dice que "La Administración del Estado no apreció que concurrieran razones de interés público que hicieran procedente la legalización de las obras ni tampoco el recurrente ha acreditado en modo alguno que se den tales razones de interés público. Por otra parte, siendo que la Administración del

Estado no ha apreciado la concurrencia de tales razones, es claro que no podría darse el acuerdo de tres Administraciones a que se refiere la Disposición Transitoria 12. 3º del Reglamento".

Vemos, por tanto, que la motivación no solo es contradictoria, sino también insuficiente. Contradictoria por cuanto nada tiene que ver la que la da la Demarcación de Costas con la que se da en respuesta al recurso de alzada. Insuficiente por cuanto se trata de una motivación genérica y estereotipada en la que se no hace ninguna referencia a esas circunstancias particulares del caso que, según la Administración, llevan a desechar el inicio del procedimiento de legalización.

Incluso en el proceso se incluye una motivación nueva, en el escrito de contestación, referida a que las sucesivas reformas y modificaciones en la **choza** han desvirtuado su posible valor etnográfico.

En este contexto, consideramos que existían datos de suficiente importancia cualitativa (inclusión en la Cata Arqueológica de **Fuerteventura** e informes técnicos de Ayuntamiento y Cabildo) para iniciar el procedimiento de legalización conforme a la Disposición Transitoria 12ª, lo cual no significa prejuzgar su resultado, sino simplemente poner de relieve, en ejercicio por la Sala de su función revisora, que debió iniciarse el procedimiento a la vista de las razones sobre el posible interés público a la legalización, o motivar, de forma suficiente, la opción por la demolición para garantizar el control judicial.

SEXTO.- En conclusión, la Administración Pública ha hecho ejercicio de la potestad de autotutela conservativa que el ordenamiento jurídico le confiere para proteger la situación de los bienes de dominio público, protección que tiene su expresión máxima en la potestad para recuperar por sí misma, sin necesidad de acudir a la tutela judicial, por lo que es plenamente ajustada a derecho la **recuperación posesoria** del espacio situado en el dominio público conforme al deslinde aprobado tras la vigencia de la ley de costas, pero no es conforme a derecho la orden de demolición pues, como vimos, existían datos suficientes para que la Administración iniciase el procedimiento de la Disposición Transitoria Duodécima del reglamento, sobre efectiva concurrencia de dichas razones de interés público, que, en su momento, y conforme previene la norma "... deberán ser apreciadas por acuerdo entre las tres Administraciones (estatal, autonómica y local), a cuyo efecto el órgano competente para dictar la resolución recabará el informe de las otras Administraciones..."

SEPTIMO.- Procede, por lo expuesto, la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo con el alcance indicado, si bien sin hacer pronunciamiento sobre las costas procesales al no apreciarse temeridad o mala fe procesal en las partes art. 139.1 LJCA).

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación:

III.- F A L L O :

Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dña Carmen Delia Ramos Herrera, en nombre y representación de D. Ovidio, contra las resoluciones mencionadas en el Antecedente Primero, que declaramos ajustadas a derecho en cuanto proceden a la **recuperación posesoria** del espacio situado en el dominio público marítimo terrestre, si bien anulamos en cuanto ordenan la demolición y retirada de la construcción situada en dicho espacio a los efectos de declarar procedente el inicio del expediente de legalización previsto en la Disposición Transitoria Duodécima de la Ley de Costas.

Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo que podrá prepararse por escrito dirigido a esta Sala en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de la notificación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.